

Fernández y Gallardón, a la conquista de las bases del PP

LOS GUARDIANES DE LAS ESENCIAS

En el centro se encuentra la mayoría, pero la militancia más conservadora es la base electoral del PP. Y esta base no está contenta con su partido. Lo demostró en la manifestación contra la excarcelación de etarras tras la anulación de la *doctrina Parot*. Lo advirtió Ana Botella cuando habló de una "posible fragmentación de la base electoral". Recobrar su confianza es ahora tarea de Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, a los que la oposición acusa de girar a la derecha con sus proyectos legislativos. El ministro del Interior defiende una Ley de Seguridad Ciudadana que multa las ofensas a la nación y una Ley de Seguridad Privada que concede a los vigilantes atribuciones policiales. El de Justicia, un Código Penal que introduce la prisión permanente revisable y una Ley del Aborto que retoma la del 85 con nuevas restricciones.

Por Virginia Miranda

Desde el Partido Popular hablan de respeto cuando son sus propias bases electorales o significados cargos de la formación los que alzan la voz contra la política del Gobierno. Tras la sentencia de Tribunal de Estrasburgo que derogó la *doctrina Parot*, tras la marcha del afiliado Santiago Abascal, tras el discurso de Ana Botella hablando de las "dudas" sobre el proyecto político. Pero el respeto no está exento de preocupación y cálculo electoral. Como ocurría con Jaime Mayor Oreja de repetir al frente de la candidatura europea; la previsible pérdida de votos de centro no permite jugarse el apoyo de la militancia conservadora.

En medio del clima de desconfianza reconocido por los populares, los ministros de Interior y de Justicia se han puesto al frente de la manifestación con proyectos legislativos acorde con el sentir de las bases. Las leyes de seguridad ciudadana y de seguridad privada de Jorge Fernández Díaz y la reforma del código penal y de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón responden a las demandas de los críticos que, lejos de contentarse con las buenas perspectivas eco-

nómicas anunciadas por el Gobierno, demandan una política sin complejos centristas. La inmigración, uno de los asuntos que más preocupan a la derecha, también tiene al político catalán enredado con la oposición y hasta con los comisarios europeos; el de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, y la de Interior, Cecilia Malmström, ha calificado de "problemáticas" e "inútiles" las cuchillas colocadas en las vallas de la frontera de Melilla, que Fernández Díaz insiste en denominar "concertinas" de carácter pasivo y disuasorio que causan heridas de carácter "leve".

El anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de noviembre, tiene por objeto "garantizar la seguridad y el respeto a los derechos y a las libertades", dijo en la rueda de prensa posterior la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En el desarrollo posterior, el titular de Interior añadió que "el espíritu que guía" al Ejecutivo también es "aislar a los grupos violentos peligrosos para la seguridad de los ciudadanos". Y lo hará con sanciones por infracciones leves –con multas de entre 100 y 1.000 euros–, como insultar a la policía; graves –de 1.001 a 30.000 euros–, como pro-

La oposición dice que las reformas de Gallardón del Código Penal y el

ferir ofensas a España, las Comunidades Autónomas o sus símbolos; y muy graves de –30.001 a 600.000 euros–, como convocar manifestaciones o participar en ellas "con finalidad coactiva desde el fin de campaña electoral hasta el fin de la votación".

La semana pasada, la Comisión de Interior daba luz verde al proyecto de Ley de Seguridad Privada que presentó el Gobierno el pasado abril. Con los votos de PP, CiU y PNV, permitirá a los vigilantes de seguridad realizar detenciones e identificaciones en la vía pública.

La mayoría de la oposición ha rechazado ambas reformas. Por considerar que representan un recorte de derechos, porque persiguen un fin electoralista y, en el último caso, porque busca el beneficio de las empresas privadas. De hecho, el ministro reconoció en su día que el sector "ha experimentado un extraordinario desarrollo"; se trata de casi 1.500 compañías con unas plantillas de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los datos disponibles de 2011. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también acaba de decir que uno de los objetivos de la nueva norma es "ayudar a que se consolide un sector económico" que, a





aborto y la de Fernández Díaz de seguridad ciudadana tienen un objetivo electoral, contentar a las bases más conservadoras.

EUROPA PRESS

pesar de las dificultades que ha sufrido a causa de la crisis en los últimos años, está “en pleno crecimiento”.

Con las reformas previstas por Gallardón ocurre otro tanto de lo mismo. El pasado jueves presentaba en el Congreso el proyecto de reforma del código penal, que introduce la prisión permanente revisable para los asesinatos más graves, entre ellos los de menores de 16 años o los cometidos por terroristas; y amplía los casos en los que podrá aplicarse la libertad vigilada que, hasta ahora, solo se imponía en delitos sexuales. Un día antes, el propio ministro anunciaba en el pleno que, antes de fin de año, presentará el proyecto de reforma de la ley del aborto.

Este asunto ha sido sin duda uno de los más espinosos para el Gobierno. Porque ha habido diferencias de criterio en el seno de la propia formación –Alfonso Alonso, portavoz parlamentario popular, reconocía en mayo que el debate sobre la reforma “está abierto” en el PP– y porque nuevamente es su base electoral la que ha protagonizado una intensa campaña para que el Ejecutivo aplique tolerancia cero al respecto.

No será éste el espíritu de la norma, pero habrá más restricciones que la de la ley de supuestos de 1985. Desde el ministerio

La reforma de la Ley del Aborto volverá a los supuestos del 85 excluyendo la discapacidad

de Justicia explican que su reforma responde a lo que argumentó el PP en su recurso de inconstitucionalidad de 2010 contra la ley aprobada por el Gobierno socialista de Zapatero. Básicamente, se tratará de que las menores de entre 16 y 18 años que vaya a abortar deberán informar a sus padres y de “volver a los supuestos incluyendo aquello que hay que modificar” para respetar el Convenio de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad. Este asunto estaba claro desde el principio, de ello se habló ya en campaña electoral. Sin embargo, estas últimas semanas aún concretaba “cómo hacerlo exactamente”.

Y es que el aborto eugenésico también ha traído cola. Sobre todo desde que el ministro Gallardón declarara en *La Razón*: “No entiendo que se desproteja al concebido,

permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación”. Aquello fue en julio de 2012. El pasado mayo, y después de que el asunto generara controversia en el seno del PP, distinguía en Onda Cero entre malformación y discapacidad sin precisar unos criterios que, reconocía, estaban aún en estudio.

Intencionada o no, esta batería de reformas legislativas coincide con el descontento de las bases, que escaló a un primer nivel en septiembre del pasado año, cuando Esperanza Aguirre y Jaime Mayor Oreja reprocharon durante un Comité Ejecutivo Nacional a Mariano Rajoy la libertad condicional por razones humanitarias al etarra Boinaga, y que se ha afianzado este mismo año. Tras las críticas de José María Aznar a la gestión de Mariano Rajoy, incluida la subida de impuestos contraria a los principios ideológicos del PP y, por tanto, de su electorado natural, y las habituales de la presidenta del PP de Madrid, dirigente enfrentada al presidente pero cuyo tirón electoral podría jugar a su favor en la carrera por encabezar la lista al Ayuntamiento de la capital, la fractura con el ala más conservadora del partido es más pronunciada desde que el Gobierno acatara la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anula la *doctrina Parot*.

En una primera manifestación, convocada a finales de octubre por la AVT en la plaza de Colón de Madrid, los dirigentes populares que acudieron a la protesta –con los vicesecretarios generales Floriano, Arenas y Pons a la cabeza– fueron increpados al grito de “traidores”. Aguirre reprochaba a Rajoy en el último Comité Ejecutivo Nacional no haber destituido a Luis López Guerra, magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el 6 de diciembre, dos semanas después de abandonar el PP tras dos décadas de militancia acusando al presidente del partido de “traicionar” sus “principios”, el exdiputado vasco y presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), Santiago Abascal, reunía a más de un millar de personas en la plaza de la República Dominicana de Madrid, donde ETA acabó con la vida de doce guardias civiles en 1986, para exigir al Gobierno que siga aplicando la *doctrina Parot*. La palabra traición, en los discursos y entre los congregados, fue nuevamente una

de las más escuchadas en la concentración del Día de la Constitución [ver entrevista a Abascal en esta página].

El malestar existe. Pero las interpretaciones son distintas. Sorprendente fue la de Ana Botella, a la que hasta ahora no se le habían escuchado públicas críticas a Rajoy. El proyecto político del PP genera “dudas” y puede haber una “posible fragmentación de

la base electoral”, dijo hace dos semanas en el Club Siglo XXI ante ministros y altos cargos del PP. Días después y preguntada por su compañera de partido, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, reconocía el “malestar” de la militancia por “algunas decisiones” del Ejecutivo que contravienen el programa y la ideología de la formación, aunque “no creo que haya habi-

do una ruptura de las bases del PP con el propio partido”.

En el PP manejan la palabra fractura con cautela. Pero el temor existe y el programa electoral, ahora que según el Gobierno ha pasado lo peor de la crisis, resurge de nuevo para tratar de salvar la base electoral más conservadora antes de que sea demasiado tarde. ●

—Tras abandonar el PP y la manifestación contra la política de Mariano Rajoy, ¿ha recibido apoyos de dirigentes del PP a título personal?

—Sí, he recibido llamadas de importantes dirigentes del PP para mostrarme su cariño, su comprensión y su afecto. Pero sobre todo, he recibido llamadas y mensajes de centenares de militantes y votantes para mostrarme su adhesión y en algunos casos incluso para decirme que iban a hacer lo mismo.

—¿Se puede hablar entonces de fractura?

—Por supuesto. Una fractura entre las bases y la cúpula del PP. Estoy convencido de que las bases están atónitas ante unas políticas que no responden a las expectativas depositadas en el Gobierno. Las medidas que pudieran corresponder al programa electoral del PP han brillado por su ausencia. Más bien al contrario, se han aplicado políticas cercanas a las de los socialistas. Por ejemplo, en Hacienda.

—¿Se sintió respaldado por Ana Botella cuando habló de “dudas” del proyecto político?

—No es que yo me viera personalmente respaldado. Lo que sí analicé como otras muchas personas es que el discurso es el mismo; el que yo hago ahora desde fuera del PP y habiendo llegado a la conclusión de que no se puede cambiar las cosas desde dentro y el que algunas personas desde dentro están también haciendo. Pero ni yo fui el primero ni la alcaldesa de Madrid ha sido la última que ha hablado de esa zozobra y confusión.

Santiago Abascal, presidente de Denaes y exmilitante del PP

“Se han aplicado políticas cercanas a las socialistas”



DENAES

—¿A quién más se refiere?

—Las posiciones que ha venido expresando la presidenta del PP de Madrid y el presidente Aznar en los últimos meses y probablemente en el último año, son radicalmente distintas de las posiciones y actitudes del Gobierno de la nación. Pero es el Gobierno el que se ha movido de sitio, no el resto de personas que están en el PP.

—¿Existe la posibilidad de que una fragmentación derive en un nuevo partido político y usted formaría parte de él?

—Cuando hay una serie de ciu-

dadanos a los que no se quiere representar y sienten la orfandad política, lo lógico es que a medio y largo plazo se organicen. En cuanto a mi futuro personal, me ha costado mucho tomar la decisión de abandonar el PP. Ha sido una decisión muy difícil porque ha supuesto dejar el partido de mi vida y el partido en el que aún milita mi padre, concejal en la localidad alavesa de Amurrio. La he madurado no durante meses, sino durante años. Comienza a gestarse allá por el Congreso de Valencia y se precipita de manera definitiva con la excarcela-

ción masiva de etarras y de otros criminales. Tomar ahora decisiones precipitadas en la línea de constituir una nueva alternativa política es algo que no se va a producir y que habrá que reflexionar con mucho cuidado.

—Pero existe la posibilidad de que surja un nuevo partido.

—Estamos hablando de hipótesis y creo que alguien que se ha dedicado tanto tiempo a la política y que aspira a seguir defendiendo sus ideas, es difícil hacerle decir de esta agua no beberé.

—¿Qué opina de los últimos proyectos legislativos del Gobierno? ¿Cree que es una reacción a la fractura de la que habla? Por ejemplo con la reforma del código penal.

—Llevamos mucho tiempo esperando a que el PP aplique el programa con el que se comprometió con los españoles que le dieron una gigantesca mayoría absoluta. Y, por lo tanto, hasta que yo no vea los proyectos convertidos en realidad no me puedo permitir aplaudir al Gobierno. Si en el ecuador de la legislatura se decide a aplicar su programa, será algo por lo que tengamos que felicitarnos muchas personas. ¿Cuáles son las razones que le han llevado a hacerlo? Podemos elucubrar si es una reacción a la fractura que se está viviendo en el PP o si estaba planificado desde el principio. Yo creo que hay algo de reacción al gran debate que se está produciendo en las bases del partido y a la desbandada de militantes.